

Sobre el presente documento se elaboró una versión pública, de conformidad al Artículo 30 de la Ley de Acceso a la Información Pública (LAI), protegiendo los datos personales de las partes que intervinieron en el presente proceso, así como datos confidenciales, según lo establecido en el Artículo 6 letras "d", "f" y "g" y 24 de la LAI

 <b>Defensoría del Consumidor</b>	<b>TRIBUNAL SANCIONADOR</b>	Fecha: 07/03/2023 Hora: 09:49 Lugar: San Salvador	Referencia: 1005-2020
<b>RESOLUCIÓN FINAL</b>			
<b>I. INTERVINIENTES</b>			
Denunciante:	Presidencia de la Defensoría del Consumidor –en adelante la Presidencia–.		
Proveedoras denunciadas:	CALLEJA, S.A. de C.V. Sucesores Luis Torres y Compañía de C.V. Productos Cárnicos, S.A. de C.V.		
<b>II. ANTECEDENTES Y HECHOS DENUNCIADOS</b>			
<p>Como expuso en su denuncia la Presidencia, en ejercicio de lo dispuesto en el artículo 58 letra f) de la Ley de Protección al Consumidor —LPC—, el día 12/12/2019 se practicó inspección en el establecimiento denominado “<i>Selectos Apopa Tres</i>”, propiedad de la proveedora CALLEJA, S.A. de C.V.</p> <p>Como resultado de la diligencia realizada, se levantaron actas de inspección de etiquetado general de alimentos preenvasados con número de referencia DVM-EG/827/19, y acta de inspección de etiquetado nutricional de alimentos preenvasados con número de referencia DVM-EN/827/19, en las cuales –mediante Informe de Inspección de Etiquetado General de Queso Duro Blando– se documentó que fueron encontrados a disposición de los consumidores, bienes que incumplían lo prescrito en los artículos 7 inciso primero y 27 inciso tercero de la LPC, en relación con el numeral 5.2.1.5 del Reglamento Técnico Centroamericano de Etiquetado General de los Alimentos Previamente Envasados (Preenvasados) -RTCA 67.01.07:10-, y el numeral 5.2.5 del Reglamento Técnico Centroamericano de Etiquetado Nutricional de Productos Alimenticios Preenvasados para Consumo Humano para la Población a partir de 3 años de edad -RTCA 67.01.60:10, <i>por comercializar bienes en los que no se cumplen las normas técnicas vigentes, respecto de la proveedora CALLEJA, S.A. de C.V., respecto de la proveedora Sucesores Luis Torres y Cía., S.A. de C.V., por fabricar productos en los cuales no se consignaba la declaración de los ingredientes que pueden causar reacciones alérgicas a personas con hipersensibilidad, y respecto de la proveedora Productos Cárnicos, S.A. de C.V. por distribuir productos en los que no se cumplen las normas técnicas vigentes; además, por no declarar en dichos productos el nombre de referencia de los valores nutricionales utilizados.</i></p>			
<b>III. INFRACCIÓN ATRIBUIDA Y ELEMENTOS DE LA INFRACCIÓN.</b>			

Tal como consta en auto de inicio (fs. 23 y 24), se les imputa a las proveedoras denunciadas la comisión de la infracción establecida en el artículo 43 letra f) de la LPC, consistente en: *“Fabricar, importar, empaçar, distribuir o comercializar bienes en los que no se cumplan las normas técnicas vigentes; así como comercializar servicios que no las cumplan”*.

De conformidad a lo dispuesto en el artículo 7 inciso primero de la LPC, *“Los proveedores que desarrollen actividades de importación, producción, transformación, almacenamiento, transporte, distribución y comercialización de bienes y prestación de servicios deberán, para no arriesgar la vida, la salud, la seguridad de las personas y el medio ambiente, observar las normas legales, reglamentarias o técnicas que se dictaren sobre la materia, así como facilitar el control, vigilancia e inspección de las autoridades competentes”*.

En consonancia con lo anterior, el inciso tercero del artículo 27 de la LPC, dispone que: *“Las exigencias especiales se determinarán en las normativas de etiquetado, presentación y publicidad de los bienes o servicios, aplicables en cada caso, para garantizar el derecho de los consumidores a una información veraz, clara, completa y oportuna”*; y precisamente, en el caso de los productos preenvasados, el Reglamento Técnico Centroamericano de Etiquetado General de Alimentos Previamente Envasados (Preenvasados) –RTCA 67.01.07:10–, en su numeral 5.2.1.5 determina que: *“Si alguno de los ingredientes o aditivos del punto anterior o las sustancias que estos contienen, como por ejemplo el gluten o lactosa, pudieran estar presentes en el producto final, aunque sea en forma no intencional, deberá indicarse claramente la posibilidad de su presencia”*. *“Esta declaración deberá colocarse luego de la lista de ingredientes en una frase separada y en forma destacada”*; asimismo, el Reglamento Técnico Centroamericano de Etiquetado Nutricional de Productos Alimenticios Preenvasados para Consumo Humano para la Población a partir de 3 años de edad –RTCA 67.01.60:10, en su numeral 5.2.5 determina que: *“En todos los casos, se debe indicar al pie de la información nutricional, la referencia utilizada, citando el nombre de la misma.”*

En congruencia con tales disposiciones, la fabricación, distribución o comercialización de medicinas, alimentos, bebidas o cualquier otro producto perecedero, en cuyas etiquetas no se exprese la declaración de los ingredientes que pueden causar reacciones alérgicas a personas con hipersensibilidad, y no se declare el nombre de referencia de los valores nutricionales utilizados, realizado por un fabricante, distribuidor o comercializador de bienes, se adecua a la conducta infractora descrita en el artículo 43 letra f) de la LPC, que literalmente dispone: *Son infracciones graves, las acciones u omisiones siguientes: f) Fabricar, importar, empaçar, distribuir o comercializar bienes en los que no se cumplan las normas técnicas vigentes; así como comercializar servicios que no las cumplan.*

Partiendo de la anterior premisa, la conducta ilícita es, por consiguiente en el presente caso: la fabricación, distribución, así como el ofrecimiento al público de cualquier clase de productos o bienes,

en cuyas etiquetas no se exprese la declaración de los ingredientes que pueden causar reacciones alérgicas a personas con hipersensibilidad, y no se declare el nombre de referencia de los valores nutricionales utilizados.]

#### IV. CONTESTACIÓN DE LAS PROVEEDORAS DENUNCIADAS

Se siguió el procedimiento consignado en los artículos 143 y siguientes de la LPC, respetando la garantía de audiencia y el derecho de defensa de las proveedoras, quienes comparecieron conforme a las actuaciones que se detallan a continuación:

A. En fecha 15/06/2022, se recibió escrito (fs. 27 al 29), firmado por la licenciada

quien actúa en calidad de apoderada general judicial con cláusula especial de la proveedora CALLEJA, S.A. de C.V., por medio del cual contestó la audiencia conferida en resolución de las trece horas con un minuto del día 27/05/2022, expuso argumentos de defensa sobre los hechos atribuidos a su representada y agregó la documentación de fs. 30 al 50.

En dicho escrito, la referida apoderada, en el ejercicio de su derecho de defensa, manifestó —en esencia—:

(i) Que por el volumen y la variedad de productos que se comercializan en cada supermercado, se hace difícil para su representada, revisar las viñetas de cada producto, para verificar que cumplan con todos los requisitos exigidos por las normas de etiquetado, ya que se sobreentiende que el responsable de colocar la viñeta a cada producto es el fabricante, ya que él es el que conoce el contenido del mismo, por lo que siendo el responsable de colocar la información en la viñeta de cada producto, el más que nadie conoce la composición del mismo, y está obligado a reconocer la legislación que lo regula.

Señala que cabe hacer mención, que su representada, al momento de contratar con cada uno de los proveedores, exige como requisito, que cada uno de los productos que ofrecen para su venta, cuente con el registro sanitario vigente, emitido por el Ministerio de Salud, al menos con ello su representada se asegura que el producto ha pasado los procesos sanitarios, y es apto para el consumo humano. Que llama la atención, que el Ministerio de Salud, antes de emitir un Registro Sanitario de cada producto, además de solicitar muestras para su análisis, también solicita viñetas, las cuales son revisadas por un técnico, a fin que cumplan con los requisitos solicitados. Y es que, al momento que el proveedor presenta el Registro Sanitario del producto, su representada asume que el Ministerio de Salud ha hecho su labor de analizar el contenido del producto, así como revisar la información contenida en la viñeta del mismo; registros que están relacionados en cada una de las viñetas de los productos.

B. Por otra parte, en fecha 20/06/2022 se recibió escrito (fs. 51 y 52), firmado por los señores  
quienes actúan en calidad de apoderados  
de la proveedora Productos Cárnicos, S.A. de C.V., por medio del cual contestaron la audiencia

conferida en resolución de las trece horas con un minuto del día 27/05/2022, expusieron argumentos de defensa sobre los hechos atribuidos a su representada y agregaron la documentación de fs. 53 a 254.

En dicho escrito, los referidos apoderados, en el ejercicio de su derecho de defensa, manifestaron –en esencia–:

(i) Que adjuntan imagen fotográfica del producto QUESO DURO BLANDO con su respectiva etiqueta complementaria, que se distribuye y comercializa actualmente a través de los canales de distribución de su representada, que contiene la etiqueta complementaria indicativa de la fuente de información nutricional (el uso de etiqueta complementaria es permitido según lo establece el RTCA 67.01.07:10. Asimismo, adjuntan imagen fotográfica de la etiqueta del producto QUESO DURO BLANDO, con el cual será comercializado el producto una vez se agoten las etiquetas viejas a las cuales se les ha agregado la etiqueta complementaria.

Señalan que con lo anterior, estiman que su representada está realizando todos los esfuerzos necesarios para el cumplimiento de la normativa aplicable, para la distribución de sus productos en el país.

C. Finalmente, en fecha 02/09/2022 se recibió escrito (fs. 258 a 261), firmado por el licenciado quien actúa en calidad de apoderado general judicial de la proveedora Sucesores Luis Torres y Compañía de C.V., por medio del cual contestó la audiencia conferida en resolución de las trece horas con un minuto del día 27/05/2022, expuso argumentos de defensa sobre los hechos atribuidos a su representada y agregó la documentación de fs. 262 a 297.

En dicho escrito, el referido apoderado, en el ejercicio de su derecho de defensa, manifestó –en esencia–:

(i) Que el numeral 5.2.5 del Reglamento Técnico Centroamericano de Etiquetado Nutricional de Productos Alimenticios Preenvasados para Consumo Humano para la Población a partir de 3 años de edad, establece claramente la necesidad que se incorporen los Valores de Referencia Nutricional, los cuales sin lugar a dudas, y tal y como las mismas actas y expresiones gráficas fotográficas adjuntas a la misma, en ambos productos fabricados por su patrocinada, contienen los referidos valores nutricionales, probablemente no en la forma acostumbrada o especificada establecidos por FAO/OMS, como ejemplifica la referida disposición reglamentaria citada, porque la misma hace referencia a una “REFERENCIA”, lo cual no constituye una obligación específica, incluso los establecidos por FAO/OMS, son ejemplificativos no taxativos, pero en todo caso, su patrocinada ha fabricado un producto que no ha omitido la obligación señalada por las disposiciones legales relacionadas en la denuncia, porque no constituye obligación taxativa sino ejemplificativa los establecidos por FAO/OMS, tal y como reza el reglamento invocado en la denuncia.

Asimismo, señala que la denuncia no cumple con el fundamento establecido en el artículo 144 de la LPC, respecto de que los hechos no están claramente determinados, por haberse consignado en actuaciones de la Defensoría del Consumidor o probado con actuaciones de otras instituciones, haberse reconocido por el infractor, constar en registros administrativos o por otras circunstancias justificadas; en tal sentido, incluso el procedimiento simplificado no es aplicable.

Por otra parte, agrega que el fundamento de la denuncia presentada por el Presidente del Consejo de Administración, no es sino más que la duplicidad de los hechos ya procesados administrativamente, que corresponden a las mismas fechas y lugares que se relacionan y corresponden al proceso sancionatorio Referencia 1002-2020 de este mismo Tribunal Sancionatorio, porque corresponden a las mismas actas y lugares que acompañan a ambos procesos.

Finalmente, acota que su patrocinada, al respecto de las viñetas utilizadas en la fabricación de sus productos alimenticios, se somete a la competencia de la Unidad de Alimentos y Bebidas de la Dirección de Salud Ambiental del Ministerio de Salud, quien siendo la autoridad administrativa competente del Órgano Ejecutivo, es quien autoriza las viñetas o “presentación” de los productos que se fabrican y sus respectivas ampliaciones, las cuales en la oportunidad procesal se presentarán en este proceso.

Ahora bien, respecto de los alegatos presentados por la licenciada  
este Tribunal procederá a pronunciarse a continuación:

1. En relación al argumento relativo a que al contar con el número de registro vigente, asumieron que el Ministerio de Salud había constatado que dicho producto si cumplía con todos los requisitos de ley para ser comercializado en el país, debe señalarse que como comercializadora de los productos inspeccionados, está obligada a verificar que todos los productos que comercialice cumplan con las normas técnicas vigentes.

Y es que, tanto los RTCA 67.01.07:10 y 67.01.60:10 como la LPC en los artículos 7 y 27, establecen la obligación de los proveedores de brindar a los consumidores la información considerada imprescindible, en este caso, la ley obligaba a CALLEJA, S.A. de C.V. a verificar que los productos que comercializaba cumplieran todos los requerimientos de las normas técnicas.

De ahí que, el hecho de haber cumplido el registro del producto ante el Ministerio de Salud y haber obtenido la certificación de registro sanitario correspondiente, no le exime de responsabilidad respecto de las conductas que pueden configurar las infracciones al artículo 43 letra f) de la LPC; por el contrario, la afirmación realizada, en el sentido que confió en que el Ministerio de Salud había verificado que dichos productos cumplieran con todos los requisitos exigidos por la normativa legal salvadoreña, y por ende eran aptos para el consumo humano y podían ser comercializados en todo el territorio salvadoreño, revela negligencia por parte de la proveedora de no verificar ni asegurarse de comercializar

productos que incumplan las correspondientes normas técnicas de etiquetado. Lo anterior revela que existe una omisión de sus obligaciones como proveedora, queriendo justificarse en el hecho de que es absolutamente entendible que un solicitante pueda suponer que el Ministerio de Salud, al examinar la documentación presentada para proceder al registro de los productos alimenticios, lleva a cabo la verificación del cumplimiento de las etiquetas con los requisitos exigidos por los reglamentos técnicos centroamericanos de etiquetado, incluyendo los RTCA 67.01.07:10 y 67.01.60:10.

En consecuencia, este Tribunal desestima el planteamiento realizado por la apoderada de dicha proveedora.

Por otra parte, respecto de los alegatos presentados por los señores

, este Tribunal procederá a pronunciarse a continuación:

1. Respecto a las impresiones fotográficas presentadas, y al argumento que su representada está realizando todos los esfuerzos necesarios para el cumplimiento de la normativa aplicable, para la distribución de sus productos en el país, debe señalarse que los mismos apoderados de la proveedora afirman que actualmente distribuyen y comercializan el producto QUESO DURO BLANDO con su respectiva etiqueta complementaria, la cual contiene la indicación de la fuente de información nutricional, por lo que puede afirmarse que antes no se realizaba dicha situación, y que el hecho de que actualmente el producto se distribuye y comercializa con su respectiva etiqueta complementaria, y que una vez se agoten las etiquetas viejas, se les pondrá la nueva etiqueta en la cual ya se cumple con la exigencia prevista en la norma técnica, es un cumplimiento posterior a la inspección realizada por los delegados de la Defensoría del Consumidor, situación que no desvirtúa el incumplimiento atribuido a la proveedora.

En consecuencia, este Tribunal desestima el planteamiento realizado por los apoderados de la proveedora Productos Cárnicos, S.A. de C.V.

Finalmente, respecto de los alegatos presentados por el licenciado

este Tribunal procederá a pronunciarse a continuación:

1. Al respecto, debe señalarse que de conformidad con el numeral 5.2.5 del RTCA 67.01.60:10, para la declaración de los Valores de Referencia Nutricional (VRN), se utilizarán de preferencia los establecidos por FAO/OMS, o bien, cualquier otra referencia. Sin embargo, en todos los casos se debe indicar, al pie de la información nutricional, la referencia utilizada, citando el nombre de la misma. Sin embargo, en los productos inspeccionados, no se indica al pie de la información nutricional el nombre de la referencia de los valores nutricionales utilizados, tal como se puede observar en la fotografía número cinco del acta de inspección DVM-EN/827/19.

Y es que, el RTCA 67.01.60:10 como la LPC en los artículos 7 y 27, establecen la obligación de los proveedores de brindar a los consumidores la información considerada imprescindible, en este

caso, la ley obligaba a Sucesores Luis Torres y Compañía de C.V. a verificar que los productos que fabricaba cumplieran todos los requerimientos de las normas técnicas.

Por otra parte, el hecho de haber cumplido el registro del producto ante el Ministerio de Salud y haber obtenido la certificación de registro sanitario correspondiente, no le exime de responsabilidad respecto de las conductas que pueden configurar las infracciones al artículo 43 letra f) de la LPC; por el contrario, la afirmación realizada, en el sentido que respecto de las viñetas utilizadas en la fabricación de sus productos alimenticios, se somete a la competencia de la Unidad de Alimentos y Bebidas de la Dirección de Salud Ambiental del Ministerio de Salud, que es quien autoriza las viñetas o “presentación” de los productos que se fabrican y sus respectivas ampliaciones, revela negligencia por parte de la proveedora de no verificar ni asegurarse de fabricar productos que incumplan las correspondientes normas técnicas de etiquetado. Lo anterior revela que existe una omisión de sus obligaciones como proveedora, queriendo justificarse en el hecho de que la Unidad de Alimentos y Bebidas antes relacionada, siendo la autoridad administrativa competente del Órgano Ejecutivo, es la entidad que autoriza las viñetas o “presentación” de los productos que se fabrican y sus respectivas ampliaciones.

Finalmente, respecto de la inconstitucionalidad del proceso alegada, en virtud de que la denuncia presentada no es más que la duplicidad de los hechos ya procesados administrativamente, que corresponden a las mismas fechas y lugares que se relacionan en el proceso sancionatorio Referencia 1002-2020, debe aclararse que en el proceso sancionatorio con Referencia 1002-2020 la inspección se llevó a cabo en el establecimiento ‘ \_\_\_\_\_ ’, propiedad de la proveedor:

., en fecha 13/12/2019; es decir, en una fecha y en un lugar diferente a los relacionados en el proceso sancionatorio que nos ocupa.

En ese sentido, no es cierto el argumento expuesto por el apoderado de la proveedora, en relación a que existe duplicidad de los hechos ya procesados administrativamente, por corresponder a las mismas fechas y lugares relacionados en el proceso sancionatorio Referencia 1002-2020, pues este Tribunal ha verificado que en dicho proceso, la inspección se realizó en otro establecimiento propiedad de otra proveedora, y se llevó a cabo en fecha distinta a la fecha del acta de inspección del presente procedimiento.

Por tanto, este Tribunal estima procedente desestimar los argumentos expuestos por el apoderado de la proveedora Sucesores Luis Torres y Compañía de C.V.

#### V. VALORACIÓN DE PRUEBA/HECHOS PROBADOS

1. De conformidad con los artículos 146 de la LPC y 106 inc. 3° de la Ley de Procedimientos Administrativos —en adelante LPA—, las pruebas oportunas, pertinentes y conducentes aportadas en el procedimiento, serán valoradas conforme a las reglas de la sana crítica, para determinar los hechos probados relacionados con la comisión de la infracción regulada en el artículo 43 letra f) de la LPC.

Al respecto, cabe señalar lo dispuesto en el artículo 63 del Reglamento de la LPC, el cual literalmente establece: *Las actas mediante las cuales los funcionarios de la Defensoría hagan constar las actuaciones que realicen, harán fe, en tanto no se demuestre con prueba pertinente y suficiente su inexactitud o falsedad. El mismo valor probatorio tendrán los informes y otros documentos que emitan los funcionarios y empleados de la Defensoría, en el ejercicio de sus funciones.*

Además, el artículo 106 inciso 6° de la LPA dispone: *“Los documentos formalizados por los funcionarios a los que se reconoce la condición de autoridad y en los que, observándose los requisitos legales correspondientes se recojan los hechos constatados por aquellos, harán prueba de estos salvo que se acredite lo contrario”.*

2. Constan en el expediente administrativo los siguientes medios de prueba:

- a) Actas de inspección DVM-EG/827/19 y DVM-EN/827/19 de fecha 12/12/2019—fs. 7 y 14—, Informe de inspección de etiquetado general de Queso Duro Blando e Informe de inspección de etiquetado nutricional de Queso Duro Blando (Tabla 3, Hallazgo 1 y Tabla 3, Hallazgo uno, respectivamente), —fs. 18 y 21—, por medio de los cuales se establece que la DC realizó inspección en el establecimiento *“Selectos Apopa Tres”* propiedad de la proveedora CALLEJA, S.A. DE C.V., sobre productos distribuidos por la proveedora Productos Cárnicos, S.A. de C.V., y fabricados por la proveedora Sucesores Luis Torres y Compañía de C.V., así como el hallazgo de 9 unidades de producto, denominado Queso Duro Blando, marca La Villita, con una cantidad nominal de Contenido Neto 400 g. **que estaban siendo ofrecidos a los consumidores y en cuyas etiquetas no se consignaba la declaración de los ingredientes que pueden causar reacciones alérgicas a personas con hipersensibilidad; además, no se declara en dichos productos el nombre de referencia de los valores nutricionales utilizados;** según lo dispuesto en el numeral 5.2.1.5 del RTCA 67.01.07:10, y numeral 5.2.5 del RTCA 67.01.60:10.
- b) Impresiones de fotografías vinculadas con las actas de inspección No. DVM-EG/827/19 y DVM-EN/827/19 (fs. 11 al 13, 15 al 17); con las que se establece la presentación de los productos objeto del hallazgo.
- c) Impresión fotográfica del producto QUESO DURO BLANDO con su respectiva etiqueta complementaria, que contiene la etiqueta complementaria indicativa de la fuente de información nutricional (fs. 53).
- d) Impresión fotográfica de la etiqueta del producto QUESO DURO BLANDO, con el cual será comercializado el producto una vez se agoten las etiquetas viejas a las cuales se les ha agregado la etiqueta complementaria (fs. 54).

Respecto a la documentación, se advierte que las denunciadas no pudieron desvirtuar la veracidad de las actas de inspección e informes de inspección. En razón de lo anterior se concluye que los citados

documentos, al mantener una conexión lógica con los hechos alegados en la denuncia, adquieren total certeza.

## VI. ANÁLISIS DE LA CONFIGURACIÓN DE LA INFRACCIÓN

Con base en los elementos probatorios antes señalados y en virtud de la *presunción de certeza* que gozan las actas de inspección de la Defensoría del Consumidor, este Tribunal establece que existe prueba suficiente para determinar que las proveedoras CALLEJA, S.A. de C.V., Productos Cárnicos, S.A. de C.V. y Sucesores Luis Torres y Compañía de C.V., ofrecieron, distribuyeron y fabricaron, respectivamente 9 unidades de producto alimenticio (Queso Duro Blando), en cuyas etiquetas no se consignaba la declaración de los ingredientes que pueden causar reacciones alérgicas a personas con hipersensibilidad; además, no se declara en dichos productos el nombre de referencia de los valores nutricionales utilizados; según lo dispuesto en el numeral 5.2.1.5 del RTCA 67.01.07:10, y numeral 5.2.5 del RTCA 67.01.60:10, según el siguiente detalle:

Acta	Producto	Cantidad Unidades	No expresaba en su etiqueta
DVM-EG/827/19	Queso Duro Blando, marca La Villita, con una cantidad nominal de Contenido Neto 400 g.	9	La declaración de los ingredientes que pueden causar reacciones alérgicas a personas con hipersensibilidad
DVM-EN/827/19	Queso Duro Blando, marca La Villita, con una cantidad nominal de Contenido Neto 400 g.	9	El nombre de referencia de los valores nutricionales utilizados

En ese sentido, este Tribunal se ha pronunciado en varias ocasiones, respecto a que la conducta ilícita en mención se materializa por el hecho de fabricar, distribuir o comercializar bienes en los que no se cumplan las normas técnicas vigentes.

Partiendo de la anterior premisa, el hecho ilícito tiene lugar cuando dentro de esa variedad de bienes que se fabrican, distribuyen o comercializan, se encuentran productos cuyas etiquetas no cumplen con las exigencias especiales que se determinan en las normativas técnicas de etiquetado.

Por otra parte, y de conformidad a lo dispuesto en el artículo 42 inc. 2º del Código Civil, según el cual: "*Culpa leve (...) es la falta de aquella diligencia y cuidado que los hombres emplean ordinariamente en sus negocios propios (...)*", así como a lo estipulado en el inc. 3º del mismo artículo: "*El que debe administrar un negocio como un buen padre de familia es responsable de esta especie de culpa*", y a lo señalado en el artículo 947 del C. Com, relativo a que: "*Las obligaciones mercantiles deben cumplirse con la diligencia de un buen comerciante en negocio propio*", este Tribunal concluye, que en el presente caso las denunciadas actuaron de manera negligente en la gestión de su negocio, ya

que CALLEJA, S.A. de C.V. como propietaria del establecimiento tenía la obligación principal de verificar y únicamente poner a disposición del consumidor aquellos productos que cumplan los requisitos y condiciones exigidas por la ley para su comercialización, lo cual no hizo, al ofrecer un total de 9 unidades de productos cuyas etiquetas no cumplieran con las exigencias especiales que se determinan en las normativas técnicas de etiquetado, poniendo en riesgo potencial el derecho a la información de los consumidores; asimismo, la sociedad Productos Cárnicos, S.A. de C.V. como distribuidora de los productos, también tenía la obligación de verificar los mismos y únicamente distribuir aquellos productos que cumplieran los requisitos y condiciones exigidas por la ley, lo cual no hizo, al distribuir un total de 9 unidades de productos cuyas etiquetas no cumplieran con las exigencias especiales que se determinan en las normativas técnicas de etiquetado, poniendo en riesgo potencial el derecho a la información de los consumidores; finalmente, la sociedad Sucesores Luis Torres y Compañía de C.V. como fabricante de los productos, también tenía la obligación de verificar los mismos y únicamente fabricar productos que cumplieran los requisitos y condiciones exigidas por la ley, lo cual no hizo, al fabricar un total de 9 unidades de productos cuyas etiquetas no cumplieran con las exigencias especiales que se determinan en las normativas técnicas de etiquetado, poniendo en riesgo potencial el derecho a la información de los consumidores.

En consecuencia, este Tribunal concluye que existe responsabilidad de las proveedoras por la comisión de la infracción que se les imputa y efectivamente se configura el ilícito establecido en el artículo 43 letra f) de la LPC, resultando procedente imponer las sanciones respectivas, conforme al artículo 46 de la misma ley.

#### **VII. PARÁMETROS PARA LA DETERMINACIÓN DE LA SANCIÓN**

Como se expuso en los acápites precedentes, se estableció la comisión de la infracción grave contenida en el artículo 43 letra f) de la LPC, la que se sanciona con multa hasta de doscientos salarios mínimos mensuales urbanos en la industria, artículo 46 LPC; por consiguiente, es facultad de este Tribunal determinar la sanción que corresponda, a la luz de los parámetros establecidos en la LPC, su reglamento y la jurisprudencia aplicable.

Así, el artículo 49 de la LPC establece los criterios para la determinación de la multa, siendo estos: tamaño de la empresa, el impacto en los derechos del consumidor, la naturaleza del perjuicio causado o grado de afectación a la vida, salud, integridad o patrimonio de los consumidores, el grado de intencionalidad del infractor, el grado de participación en la acción u omisión, cobro indebido realizado y las circunstancias en que ésta se cometa, la reincidencia o incumplimiento reiterado, según sea el caso.

A continuación, se concretará cada uno de ellos, en lo aplicable al presente caso:

##### ***a. Tamaño de la empresa.***

En el presente procedimiento, a pesar de haberse solicitado a la proveedora que proporcionara: copia de las declaraciones de IVA del período comprendido entre el mes de noviembre de 2019 al mes de diciembre de 2020, y de la declaración de renta del ejercicio fiscal de los años 2019 y 2020; todo, con el propósito de determinar el tamaño de empresa, la denunciada no atendió dicho requerimiento. Es decir, en el presente procedimiento administrativo sancionador la proveedora ha mostrado una conducta procesal que evidencia el incumplimiento de su deber a prestar la colaboración que le es requerida para el buen desarrollo de los procedimientos (art. 17 número 5 de la LPA), por haber omitido presentar la información solicitada por esta autoridad sancionadora.

No obstante lo anterior, es un hecho público y notorio que la proveedora cuenta con *presencia en los 14 departamentos a nivel nacional; 7,500 colaboradores* y que además posee *98 salas de venta a nivel nacional*, según publicación realizada por la denunciada en su página web

Según la Ley de Fomento, Protección y Desarrollo de la Micro y Pequeña Empresa (ley Mype) en su artículo 3 define a las micro y pequeñas empresas de la siguiente manera: "*Microempresa: Persona natural o jurídica que opera en los diversos sectores de la economía, a través de una unidad económica con un nivel de ventas brutas anuales hasta 482 salarios mínimos mensuales de mayor cuantía y hasta 10 trabajadores. Pequeña Empresa: Persona natural o jurídica que opera en los diversos sectores de la economía, a través de una unidad económica con un nivel de ventas brutas anuales mayores a 482 y hasta 4,817 salarios mínimos mensuales de mayor cuantía y con un máximo de 50 trabajadores*".

Al contrastar la información publicada por la proveedora, con lo establecido en el artículo 3 de la Ley Mype, este Tribunal concluye que CALLEJA, S.A. de C.V., cuenta con ingresos superiores a los regulados por dicha ley, los cuales se equiparan a los de un gran contribuyente, por lo que, para los efectos de la cuantificación de la multa será considerada como una empresa de *tamaño grande*.

Ahora bien, a partir de la documentación financiera presentada por la proveedora Productos Cárnicos, S.A. de C.V., consistente en formularios de declaración y pago del Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios del período comprendido desde el mes de noviembre de 2019 hasta el mes de diciembre de 2020 (fs. 55 al 252); y declaraciones del impuesto sobre la renta y contribución especial del ejercicio fiscal de los años 2019 y 2020 (fs. 237 y 253); se tomará en cuenta, la declaración del impuesto sobre la renta y contribución especial del año 2019, por ser el año en el que ocurrieron los hechos de la infracción, comprobando que, en el referido año, la proveedora tuvo un total de ingresos por la cantidad de \$29,186,452.96 dólares de los Estados Unidos de América.

Al contrastar la información financiera de la proveedora, con lo establecido en el art. 3 de la Ley Mype, este Tribunal concluye que la proveedora Productos Cárnicos, S.A. de C.V., cuenta con ingresos superiores a los regulados por dicha ley, los cuales se equiparan a los de una gran empresa (declaración

del impuesto sobre la renta y contribución especial del año 2019, por lo que, para los efectos de la cuantificación de la multa será considerada como una empresa de tamaño grande.

Cabe mencionar, que este Tribunal ha tenido acceso además a información de carácter público del Ministerio de Hacienda, Dirección General de Impuestos Internos, en la que la proveedora denunciada se encuentra clasificada como **gran contribuyente**, por lo que para los efectos de la cuantificación de la multa así será considerada.

Cabe mencionar también, que en el presente procedimiento administrativo sancionador la proveedora infractora ha mostrado una conducta procesal que evidencia el cumplimiento de su deber a prestar la colaboración que le es requerida para el buen desarrollo de los procedimientos (artículo 17 número 5 de la LPA).

Finalmente, a partir de la documentación financiera presentada por la proveedora Sucesores Luis Torres y Compañía de C.V., consistente en formularios de declaración y pago del Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios del período comprendido desde el mes de noviembre de 2019 hasta el mes de diciembre de 2020 (fs. 262 al 287); y declaraciones del impuesto sobre la renta y contribución especial del ejercicio fiscal de los años 2019 y 2020 (fs. 288 al 293); se tomará en cuenta, la declaración del impuesto sobre la renta y contribución especial del año 2019, por ser el año en el que ocurrieron los hechos de la infracción, comprobando que, en el referido año, la proveedora tuvo un total de ingresos por la cantidad de \$13,033,364.77 dólares de los Estados Unidos de América.

Al contrastar la información financiera de la proveedora, con lo establecido en el art. 3 de la Ley Mype, este Tribunal concluye que la proveedora Sucesores Luis Torres y Compañía de C.V., cuenta con ingresos superiores a los regulados por dicha ley, los cuales se equiparan a los de una gran empresa (declaración del impuesto sobre la renta y contribución especial del año 2019, por lo que, para los efectos de la cuantificación de la multa será considerada como una empresa de tamaño grande.

Cabe mencionar, que este Tribunal ha tenido acceso además a información de carácter público del Ministerio de Hacienda, Dirección General de Impuestos Internos, en la que la proveedora denunciada se encuentra clasificada como **gran contribuyente**, por lo que para los efectos de la cuantificación de la multa así será considerada.

Cabe mencionar también, que en el presente procedimiento administrativo sancionador la proveedora infractora ha mostrado una conducta procesal que evidencia el cumplimiento de su deber a prestar la colaboración que le es requerida para el buen desarrollo de los procedimientos (artículo 17 número 5 de la LPA).

***b. Grado de intencionalidad del infractor.***

Este Tribunal considera este elemento en el sentido de analizar si el sujeto ha obrado dolosa o cuando menos culposamente; es decir, que la transgresión a la norma haya sido querida o se deba a imprudencia o negligencia del sujeto. Por tanto, la existencia de un nexo de culpabilidad constituye una condición para la configuración de la conducta sancionable.

Así, en reiteradas ocasiones, este Tribunal ha establecido a través de sus resoluciones, conforme a lo dispuesto en el artículo 40 inciso segundo de la LPC, que las infracciones administrativas son sancionables aún a título de simple negligencia o descuido. En ese orden, del análisis de los hechos y documentación agregada al expediente, se determinó una actuación negligente por parte de las proveedoras, pues, CALLEJA, S.A. de C.V. como propietaria del establecimiento, es la principal responsable de adoptar las medidas necesarias a efecto de dar cumplimiento a las obligaciones que impone la ley de la materia, como es verificar que los productos que ofrecía a sus clientes cumplieran todos los requerimientos de las normas técnicas al momento de recibirlos de su proveedor, y en caso de que estos no cuenten con información completa en sus etiquetas, sean cambiados inmediatamente a fin de no ofrecer productos a los consumidores que no cumplan la normativa técnica vigente; asimismo, Productos Cárnicos, S.A. de C.V. como distribuidora de los productos, era responsable de verificar los mismos y únicamente distribuir aquellos productos que cumplieran los requisitos y condiciones exigidas por la ley, lo cual no hizo; finalmente, Sucesores Luis Torres y Compañía de C.V. como fabricante de los productos, era responsable de verificar los mismos y únicamente fabricar productos que cumplieran los requisitos y condiciones exigidas por la ley, lo cual no hizo. Por lo que, en el presente caso, se configura plenamente una conducta negligente por parte de las proveedoras CALLEJA, S.A. de C.V., Productos Cárnicos, S.A. de C.V. y Sucesores Luis Torres y Compañía de C.V., por no haber atendido con la debida diligencia sus negocios, incumpliendo sus obligaciones como comerciantes.

*c. Grado de participación en la acción u omisión.*

A partir de un examen del presente expediente administrativo, queda demostrado que el grado de participación en la comisión de la infracción de las proveedoras, es directa e individual, pues se acreditó: (1) que en el establecimiento propiedad de la proveedora CALLEJA, S.A. de C.V., — “Selectos Apopa Tres”, el día 12/12/2019, en productos distribuidos por la proveedora Productos Cárnicos, S.A. de C.V. y fabricados por la proveedora Sucesores Luis Torres y Compañía de C.V.— se puso a disposición de los consumidores 9 unidades de producto alimenticio denominado Queso Duro Blando, marca La Villita, con una cantidad nominal de Contenido Neto 400 g., que estaban siendo ofrecidos a los consumidores y en cuyas etiquetas no se consignaba la declaración de los ingredientes que pueden causar reacciones alérgicas a personas con hipersensibilidad; además, no se declara en dichos productos el nombre de referencia de los valores nutricionales utilizados; según lo dispuesto en el numeral 5.2.1.5 del RTCA 67.01.07:10, y numeral 5.2.5 del RTCA 67.01.60:10.

*d. Impacto en los derechos del consumidor y naturaleza del perjuicio ocasionado.*

En el caso en particular, es pertinente señalar que la configuración de la infracción administrativa relativa a *Fabricar, importar, empaquetar, distribuir o comercializar bienes en los que no se cumplan las normas técnicas vigentes; así como comercializar servicios que no las cumplan*, consignada en el artículo 43 letra f) de la LPC; transgrede el derecho de los consumidores de recibir de las proveedoras la información completa, precisa, veraz, clara y oportuna, que determine las características de los productos a adquirir; y que si bien, en este caso, con dicha conducta, no se ha comprobado un daño concreto a una persona en particular, este Tribunal reafirma que la acción que configura la infracción es capaz de ocasionar un perjuicio potencial en el colectivo de consumidores, ya que basta que los productos que no cumplen con las normas técnicas vigentes se encuentren a disposición de los consumidores para generar el riesgo que éstos sean adquiridos en dichas condiciones.

Al respecto, es importante señalar que la falta de datos requeridos por disposición normativa, impacta no solo en el derecho de información de los consumidores, sino que, además, representa un perjuicio potencial en bienes jurídicos como la salud o la seguridad de los consumidores, que son tutelados por el legislador de forma difusa.

En este punto, debe recordarse lo sostenido el Juzgado Segundo de lo Contencioso Administrativo, en jurisprudencia reciente (V.gr. en la sentencia de referencia 00010-18ST-COPA-2CO de las diez horas del día 12/06/2018), *“no era necesario que se determinara, por ejemplo, que un consumidor compró o adquirió tales productos para acreditarse el daño, basta con que estos sean ofrecidos a los mismos, tal como lo describe la conducta típica (“Ofrecer bienes en los que no se cumplan las normas técnicas vigentes”). Así, el ofrecer un producto que no cumple las normas técnicas, en este caso, la designación del tipo de yogurt, inhibe al consumidor el conocer información sobre un producto que puede ser de su interés”*.

En línea con lo anterior, la SCA en la sentencia definitiva de referencia 416-2011, pronunciada a las quince horas con catorce minutos del día 21/12/2018, ha establecido que: *“en las infracciones de peligro abstracto, el legislador, atendiendo a la experiencia, advierte una peligrosidad general de la acción típica para un determinado bien jurídico, a partir de una valoración probabilística, por lo que con la tipificación se dispone adelantar la barrera de protección sancionando el accionar, sin esperar la realización de un peligro concreto de una persona determinada o de la lesión efectiva”*.

En este orden de ideas, y tomando en cuenta la jurisprudencia antes referida, se puede afirmar que para imponer las sanciones respectivas en el presente caso y, además, para graduar las mismas, (a) no es necesario comprobar ni justificar una afectación concreta y material en la esfera de los consumidores; (b) ni que existan denuncias de personas que hubiesen adquirido los bienes fabricados, ofrecidos y distribuidos por las proveedoras, que resultaron con incumplimiento.

*e. Cobro indebido realizado, las circunstancias en que esta se comete y el beneficio que obtiene el infractor.*

Este parámetro será considerado según lo establece la Sala de Constitucional en la sentencia de inconstitucionalidad de ref. 109-2013 de fecha 14/01/2016, en la que señala que uno de los factores de dosimetría punitiva es: "(...) el beneficio que, *si acaso, obtiene el infractor con el hecho*". Conforme a ello, debemos tener en cuenta el precio de los productos objeto de hallazgo, pues de haberse realizado la venta de los mismos, esto constituiría el beneficio ilícito obtenido por las infractoras.

Así, para el caso que nos ocupa, de la lectura de las Actas de Inspección e Impresiones de fotografías (fs. 11 al 13, 15 al 17) con las que se establece la presentación de los productos objeto del hallazgo y el precio de los mismos, se observó lo siguiente:

Acta	Establecimiento	Producto	Acta de Inspección	Precio ofrecido al público	Foto	Total beneficio potencial de concretarse la venta
DVM-EG/827/19	Selectos Apopa Tres	Queso Duro Blando, marca La Villita, con una cantidad nominal de Contenido Neto 400 g.	12/12/2019 (fs. 7-8)	\$4.57	fs. 11 al 13	\$41.13
DVM-EN/827/19	Selectos Apopa Tres	Queso Duro Blando, marca La Villita, con una cantidad nominal de Contenido Neto 400 g.	12/12/2019 (fs. 14)	\$4.57	Fs. 15 al 17	\$41.13

Considerando la información anterior, en el presente caso se observa la concurrencia de situaciones en las que puede estimarse un posible beneficio ilícito generado por la infracción, pero éste resulta sustantivamente inferior al perjuicio ocasionado por la misma. En esta situación, una multa basada estrictamente en el *beneficio potencial* podría resultar desproporcionadamente baja con relación a la *gravedad del perjuicio potencial* generado por la infracción.

Cabe precisar entonces que, en el caso de mérito, las multas a imponer tomarán en cuenta no solo la cuantía del posible beneficio ilícito que obtendrían las proveedoras en el caso de que efectivamente hubieran vendido los productos objeto de hallazgo, el cual ascendería a la cantidad total de **\$41.13**, sino que también se calcularán las multas considerando el perjuicio potencial causado por la comisión de la infracción.

En tal sentido, conforme a lo expuesto en el romano VI de la presente resolución, a partir de la inspección realizada por la DC, se comprobó que las proveedoras fabricaron, distribuyeron y comercializaron *-en el establecimiento propiedad de la sociedad CALLEJA, S.A. de C.V. y en la misma*

*fecha-* productos en cuyas etiquetas no se consignaba la declaración de los ingredientes que pueden causar reacciones alérgicas a personas con hipersensibilidad; además, no se declara en dichos productos el nombre de referencia de los valores nutricionales utilizados; según lo dispuesto en el numeral 5.2.1.5 del RTCA 67.01.07:10, y numeral 5.2.5 del RTCA 67.01.60:10.

En consecuencia, este Tribunal estima que, la falta de información en las etiquetas de los productos, representa un **perjuicio potencial grave al derecho a la información** de los consumidores y debe ser tomado en consideración como criterio para la determinación de las multas, pues se ha evidenciado una puesta en peligro, en más de una ocasión, los derechos fundamentales de los consumidores.

*f. Finalidad inmediata o mediata perseguida con la imposición de la sanción.*

Mediante las multas impuestas, este Tribunal Sancionador pretende disuadir a las infractoras CALLEJA, S.A. de C.V., Productos Cárnicos, S.A. de C.V. y Sucesores Luis Torres y Compañía de C.V., que han cometido la infracción descrita en el artículo 43 letra f) de la LPC, con el fin de evitar futuras conductas prohibidas en detrimento de los consumidores y que adopten las medidas necesarias a efecto de dar cumplimiento a las obligaciones que les impone la LPC.

Es menester señalar que este Tribunal, con la imposición de la sanción —multa—, busca prevenir futuros incumplimientos a la LPC como el que nos ocupa, máxime cuando todo proveedor de bienes se encuentra en la obligación de fabricar, distribuir y comercializar productos que sean óptimos para el consumo, situación que no consta acreditada en el presente caso, con el fin de salvaguardar el interés general.

### VIII. DETERMINACIÓN DE LA SANCIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE LA MULTA

Este Tribunal, en uso de la sana crítica -artículo 146 inc. 4° de la LPC- y habiendo considerado los elementos del artículo 49 de la LPC, procederá a realizar el cálculo de las multas a imponer a las proveedoras CALLEJA, S.A. de C.V., Productos Cárnicos, S.A. de C.V. y Sucesores Luis Torres y Compañía de C.V.

De acuerdo al artículo 46 de la LPC, las infracciones calificadas como graves se sancionarán con multa hasta de 200 salarios mínimos mensuales urbanos en la industria.

Para tal efecto, respecto al tamaño de empresa, se ha considerado a las proveedoras como empresas de *tamaño grande*, según lo relacionado en la letra a. del romano anterior.

Por otra parte, es importante reiterar que las sanciones en materia de consumo tienen doble finalidad: por un lado, corregir al que ha realizado la práctica ilegal y, por otro, evitar que se sigan cometiendo conductas prohibidas en detrimento de los consumidores (carácter disuasivo de la sanción).

Dicho esto, en el caso de mérito se efectuó la modulación de las multas en razón del grado de intencionalidad de la conducta cometida, ya que para el caso no se acreditó el dolo, sino *negligencia*. También se tomó en cuenta que el beneficio potencial que pudieron obtener las proveedoras fue *mínimo*,

en caso de haberse concretado la venta del producto objeto de hallazgo, el cual ascendería a la cantidad total de \$41.13; no obstante lo anterior, tal como se señaló en la letra e. del romano VII de esta resolución, se tomó en cuenta el perjuicio potencial de las conductas realizadas por las proveedoras, las cuales han sido catalogadas como *graves*, ya que, las mismas fueron verificadas *en el mismo establecimiento*, poniendo en riesgo el derecho a la información de los consumidores.

Finalmente, en el presente procedimiento ha quedado evidenciado el hecho que las proveedoras Productos Cárnicos, S.A. de C.V. y Sucesores Luis Torres y Compañía de C.V. aportaron la documentación financiera solicitada, cumpliendo con ello, su deber de prestar la colaboración que les es requerida para el buen desarrollo del procedimiento (artículo 17 número 5 de la LPA); razón por la cual, dicho aspecto ha sido tomado en cuenta en favor de dichas proveedoras para la cuantificación de la multa.

Por otra parte, en el presente procedimiento la proveedora CALLEJA, S.A. de C.V. ha mostrado una conducta procesal que evidencia el incumplimiento de su deber a prestar la colaboración que le es requerida para el buen desarrollo de los procedimientos (artículo 17 número 5 de la LPA), tal y como se ha establecido en la letra a. del romano VII, pues omitió presentar la información financiera solicitada por esta autoridad sancionadora, en tal sentido, este aspecto será considerado para la determinación de la multa; ya que a juicio de este Tribunal dicho comportamiento denota falta de diligencia y de cooperación del agente infractor dentro del procedimiento administrativo sancionador.

Por consiguiente, y conforme al análisis antes expuesto, en aplicación de los principios de disuasión, proporcionalidad y racionalidad, que deben sustentar la imposición de la sanción, es procedente imponer a las proveedoras: (i) CALLEJA, S.A. de C.V. una multa de: SEIS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y UN DÓLARES CON SETENTA Y CUATRO CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (\$6,691.74), equivalentes a veintidós meses de salario mínimo mensual urbano en la industria, por la comisión de la infracción regulada en el artículo 43 letra f) de la LPC, en relación al artículo 7 inciso primero y 27 inciso tercero de la LPC, y numeral 5.2.1.5 del RTCA 67.01.07:10, y numeral 5.2.5 del RTCA 67.01.60:10, por comercializar productos que no cumplen la normativa técnica vigente, al encontrarse a disposición de los consumidores productos en cuyas etiquetas no se consignaba la declaración de los ingredientes que pueden causar reacciones alérgicas a personas con hipersensibilidad; además, no se declara en dichos productos el nombre de referencia de los valores nutricionales utilizados; (ii) Productos Cárnicos, S.A. de C.V. una multa de: SIETE MIL TRESCIENTOS DÓLARES CON OCHO CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (\$7,300.08), equivalentes a veinticuatro meses de salario mínimo mensual urbano en la industria, por la comisión de la infracción regulada en el artículo 43 letra f) de la LPC, en relación al artículo 7 inciso primero y 27 inciso tercero de la LPC, y numeral 5.2.1.5 del RTCA 67.01.07:10, y

R/

numeral 5.2.5 del RTCA 67.01.60:10, por distribuir productos que no cumplen la normativa técnica vigente, al encontrarse a disposición de los consumidores productos en cuyas etiquetas no se consignaba la declaración de los ingredientes que pueden causar reacciones alérgicas a personas con hipersensibilidad; además, no se declara en dichos productos el nombre de referencia de los valores nutricionales utilizados; (iii) Sucesores Luis Torres y Compañía de C.V. una multa de: SIETE MIL TRESCIENTOS DÓLARES CON OCHO CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (\$7,300.08), equivalentes a veinticuatro meses de salario mínimo mensual urbano en la industria, por la comisión de la infracción regulada en el artículo 43 letra f) de la LPC, en relación al artículo 7 inciso primero y 27 inciso tercero de la LPC, y numeral 5.2.1.5 del RTCA 67.01.07:10, y numeral 5.2.5 del RTCA 67.01.60:10, por fabricar productos que no cumplen la normativa técnica vigente, al encontrarse a disposición de los consumidores productos en cuyas etiquetas no se consignaba la declaración de los ingredientes que pueden causar reacciones alérgicas a personas con hipersensibilidad; además, no se declara en dichos productos el nombre de referencia de los valores nutricionales utilizados.

#### IX. DECISIÓN

Por tanto, sobre la base de lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 11, 14, 101 inciso 2° de la Constitución de la República; 7 inciso primero, 27 inciso tercero, 40, 43 letra f), 46, 49, 83 letra b), 144 y siguientes de la LPC; y 112, 139 y 154 de la LPA, este Tribunal **RESUELVE**:

- a) *Téngase por agregado* el escrito presentado por la licenciada así como la documentación que consta agregada de fs. 30 al 50. Además, *tome nota* la Secretaría de este Tribunal del lugar y correo electrónico señalados por la apoderada de la proveedora CALLEJA, S.A. de C.V. para recibir actos de comunicación; así como del nombre de la persona comisionada para tal efecto.
- b) *Téngase por agregado* el escrito presentado por los señores así como la documentación que consta agregada de fs. 53 a 254.
- c) *Téngase por agregado* el escrito presentado por el licenciado Montalvo; así como la documentación que consta agregada de fs. 262 al 297. Además, *tome nota* la Secretaría de este Tribunal del lugar y correo electrónico señalados por el apoderado de la proveedora Sucesores Luis Torres y Compañía de C.V. para recibir actos de comunicación; así como del nombre de la persona comisionada para tal efecto.
- d) *Dese intervención* a la proveedora CALLEJA, S.A. de C.V., por medio de su apoderada general judicial con cláusula especial, licenciada
- e) *Dese intervención* a la proveedora Productos Cárnicos, S.A. de C.V., por medio de sus apoderados señores.

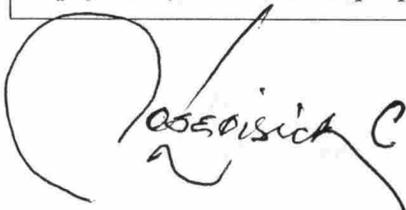
- f) *Dese intervención* a la proveedora Sucesores Luis Torres y Compañía de C.V., por medio de su apoderado general judicial, licenciado
- g) *Téngase por contestada* la audiencia conferida a CALLEJA, S.A. de C.V., en los términos relacionados en la presente resolución.
- h) *Téngase por contestada* la audiencia conferida a Productos Cárnicos, S.A. de C.V., en los términos relacionados en la presente resolución.
- i) *Téngase por contestada* la audiencia conferida a Sucesores Luis Torres y Compañía de C.V., en los términos relacionados en la presente resolución.
- j) *Sanciónese* a la proveedora CALLEJA, S.A. de C.V., con la cantidad de SEIS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y UN DÓLARES CON SETENTA Y CUATRO CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (\$6,691.74), equivalentes a veintidós meses de salario mínimo mensual urbano en la industria —D.E. N° 6 del 21/12/2017, publicado en el D.O. N° 240, tomo 417 del 22/12/2017—, por la comisión de la infracción regulada en el artículo 43 letra f) de la LPC, en relación al artículo 7 inciso primero y 27 inciso tercero de la LPC, y numeral 5.2.1.5 del RTCA 67.01.07:10, y numeral 5.2.5 del RTCA 67.01.60:10, conforme al análisis expuesto en la presente resolución y con fundamento en las disposiciones legales precitadas.
- k) *Sanciónese* a la proveedora Productos Cárnicos, S.A. de C.V., con la cantidad de SIETE MIL TRESCIENTOS DÓLARES CON OCHO CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (\$7,300.08), equivalentes a veinticuatro meses de salario mínimo mensual urbano en la industria —D.E. N° 6 del 21/12/2017, publicado en el D.O. N° 240, tomo 417 del 22/12/2017—, por la comisión de la infracción regulada en el artículo 43 letra f) de la LPC, en relación al artículo 7 inciso primero y 27 inciso tercero de la LPC, y numeral 5.2.1.5 del RTCA 67.01.07:10, y numeral 5.2.5 del RTCA 67.01.60:10, conforme al análisis expuesto en la presente resolución y con fundamento en las disposiciones legales precitadas.
- l) *Sanciónese* a la proveedora Sucesores Luis Torres y Compañía de C.V., con la cantidad de SIETE MIL TRESCIENTOS DÓLARES CON OCHO CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (\$7,300.08), equivalentes a veinticuatro meses de salario mínimo mensual urbano en la industria —D.E. N° 6 del 21/12/2017, publicado en el D.O. N° 240, tomo 417 del 22/12/2017—, por la comisión de la infracción regulada en el artículo 43 letra f) de la LPC, en relación al artículo 7 inciso primero y 27 inciso tercero de la LPC, y numeral 5.2.1.5 del RTCA 67.01.07:10, y numeral 5.2.5 del RTCA 67.01.60:10, conforme al análisis expuesto en la presente resolución y con fundamento en las disposiciones legales precitadas.

Dichas multas deben hacerse efectivas en la Dirección General de Tesorería del Ministerio de Hacienda, **dentro de los diez días hábiles siguientes al de la notificación de esta resolución**, debiendo comprobar a este Tribunal su cumplimiento dentro del plazo indicado; caso contrario, la Secretaría de este Tribunal **certificará la presente resolución para ser remitida a la Fiscalía General de la República para su ejecución forzosa.**

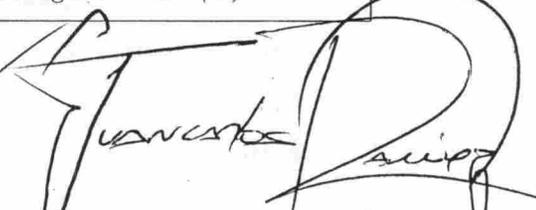
m) Notifíquese.

#### INFORMACIÓN SOBRE RECURSO

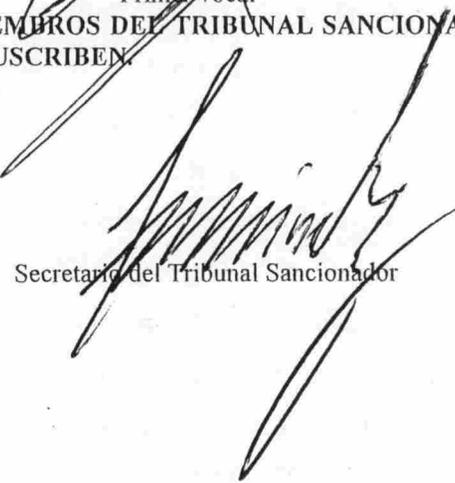
La presente resolución no admite recurso, de conformidad con lo expuesto en el artículo 167 inciso 3° de la Ley de Procedimientos Administrativos, según el cual: *“Los actos y resoluciones dictados con posterioridad a la entrada en vigencia de esta ley, se regirán en cuanto al régimen de recursos, por las disposiciones de la misma.”*; en relación con el artículo 158 N° 5 del mismo cuerpo normativo, que dispone: *“La resolución por la que se decida tramitar el expediente mediante el procedimiento simplificado y la resolución que pone fin al procedimiento, no admitirán ningún recurso (...)”*.

  
José Leoisick Castro  
Presidente

  
Pablo José Zelazca Meléndez  
Primer vocal

  
Juan Carlos Ramírez Cienfuegos  
Segundo vocal

**PRONUNCIADA POR LOS MIEMBROS DEL TRIBUNAL SANCIONADOR DE LA DEFENSORÍA  
DEL CONSUMIDOR QUE LA SUSCRIBEN. OG/MIP**

  
Secretario del Tribunal Sancionador